

El desmantelamiento de PEMEX

David Ibarra

La situación de Pemex llega a un punto crítico que apenas ocultan el ascenso de los precios internacionales del petróleo y algún modesto avance en el esfuerzo de formación de capital pospuesto por años. La empresa está dejando de cumplir las metas de su creación en cuanto a fomentar desarrollo, industrialización y capitalización nacionales, abastecer de energéticos baratos a la economía y contribuir a la salud de la balanza de pagos.

El objetivo central de Petróleos Mexicanos ha dejado de ser el de impulsar el crecimiento para convertirse en instrumento equilibrador de corto plazo del presupuesto público y de las cuentas externas. El abasto doméstico de energéticos, crecientemente se satisface con importaciones de gasolinas, gas y productos petroquímicos. La significación del petróleo en la balanza de pagos sigue siendo importante --aunque su contribución relativa disminuya dado el ascenso de otras exportaciones-- principalmente por el alza de las cotizaciones internacionales, ya que los volúmenes vendidos declinan y seguirán declinando al ritmo del agotamiento de las reservas y las posibilidades de extracción.

Quiérase o no, el periodo del auge petrolero parece cosa del pasado, en gran parte debido a nuestros errores. Aun así, hay recursos susceptibles de aprovecharse para sostener la producción sin caídas espectaculares, esto es, sin causar trastornos económicos serios. Adviértase aquí que México ocupa el lugar onceavo en el mundo en cuanto a los recursos petroleros potencialmente aprovechables.

Por eso, uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana durante setenta años comienza a flaquear. Las causas son variadas, aunque ajenas en lo medular al manejo intrínseco de Pemex. No significa lo anterior la ausencia de ineficiencias, fallas administrativas, técnicas, exceso de empleo, rezagos en la modernización, ni

imperfecciones en los sistemas regulatorios, en el control de costos o en la maximización de los rendimientos de las cadenas productivas. Sin embargo, los obstáculos centrales a la revitalización de la industria petrolera, nacen de la ausencia crónica de una estrategia energética de largo plazo, como parte nodal de las políticas públicas de desarrollo y de seguridad nacionales. Y, junto a ello, está la exacción indiscriminada de las rentas petroleras para sanear desequilibrios de las finanzas públicas, olvidando que la producción de hidrocarburos requiere de inversiones continuas y cuantiosas para compensar la declinación natural de los yacimientos.

Las soluciones al problema descrito, sin buscar seriamente alternativas, no han rebasado la intención ideológica simplista de privatizar a Pemex en todo o por partes, a fin de allegarse recursos que transitoriamente alivien las astringencias financieras del Gobierno Federal. Con la privatización se publicita la esperanza de que aporte alguna eficiencia, pero se oculta la posibilidad de que luego empeoren sin remedio los problemas. Pareciera que dar respiro a la reconstrucción de Pemex, está en alguna medida fuera del horizonte de las principales opciones políticas consideradas.

Una de las primeras tareas consiste en dilucidar la posibilidad de sostener la capacidad de la producción petrolera en el presente sexenio y luego durante un periodo posterior tan prolongado como sea posible. La pregunta nos remite directamente a contrastar la política de extracción con la de reconstitución de las reservas y los trabajos de exploración, reaprovechamiento de los campos viejos y el desarrollo de los nuevos. En esos terrenos, la respuesta es desoladora: se ha inhibido el gasto en exploración y desarrollo; la extracción excede a la reconstitución de las reservas.

La restricción financiera impuesta a Pemex, también ha impedido acrecentar la capacidad de refinación y equilibrar las líneas internas de producción. Pemex-Refinación queda dañada, además, por la práctica frecuente de hacerle asumir subsidios a la gasolina y al diesel, a veces, superiores a los dos mil millones de dólares anuales. Y la petroquímica parece un sector abandonado y devastado.

Por eso, el debate sobre la reforma energética, más que gravitar obsesivamente en torno a la posible privatización parcial o total de lo que va quedando de Pemex, debiera centrarse en la eliminación de los obstáculos que estorban su remozamiento como consorcio de clase mundial y como fuente de ingresos volcada al desarrollo interno. Incluso, se esgrime políticamente la tesis falsa, dada la existencia de amplios márgenes de maniobra, de tenerse que comprimir el gasto social a fin de acrecentar la inversión en la empresa. Ya no basta haber despojado por entero a Pemex de las rentas petroleras, se quiere, además, arrebatarle *ex-ante*, las que produzca en el futuro.

Precisamente con propósitos políticos, se ha difundido la leyenda negra de esta empresa, donde se unen la crítica de ser un centro de corrupción e ineficiencia, con la idea falsa de que se carece de recursos para capitalizarle, haciendo insoslayable su extranjerización. Mucho tendrá que hacerse dentro de Pemex para compensar un cuarto de siglo de olvidos, así como eliminar malos manejos y baja productividad. Aun sin ello, hoy por hoy, Pemex es capaz de sostenerse con los fondos que generan su producción y los procesos de modernización física, técnica y administrativos, sin dejar de generar dividendos generosos pero no confiscatorios al Estado.

Sin duda, la utilización de los excedentes del petróleo debe apoyar al gasto social y de inversión a través del sector público y así ha ocurrido históricamente. Sin embargo, ello no debiera traducirse en la muerte por inanición de la empresa más importante y rentable del país. Impedir a Pemex la reconstitución de reservas, forzarla con exageración al endeudamiento y estorbar la renovación de sus instalaciones, constituyen políticas contrarias al verdadero interés nacional.

Es imperativo amoldar normas jurídicas y reglamentos a fin de otorgar a Pemex autonomía de gestión, siguiendo la pauta del régimen concedido al Banco de México. Ello significaría avanzar simultáneamente en varios frentes. De un lado, segregar a Pemex del presupuesto federal --como se ha hecho con Nacional Financiera--, esto es,

liberarla de las rigideces presupuestales nacionales o internacionales que regulan el gasto y el endeudamiento gubernamental desde una perspectiva puramente macroeconómica. Sólo así podrá manejarse con criterios de rentabilidad, eficiencia y competitividad como cualquier otro consorcio inserto en los mercados globalizados. Pemex ganaría agilidad en la toma de decisiones, al no quedar sujeto a los trámites y autorizaciones prolongadas, costosos o innecesarios. A la empresa y al Consejo de Administración se les juzgaría y evaluaría por resultados y no por la sujeción a numerosos controles burocráticos *ex ante*. Al propio tiempo, las autoridades monetarias y financieras, tendrían que asumir el costo político íntegro de sus políticas y decisiones, en vez de transferirlo cómodamente a Pemex.

Una última observación: ya la reforma energética parece políticamente encarrerada en dirección poco deseable. Así se manifiesta en las reiteradas campañas publicitarias que justifican la inversión privada en el sector petrolero, sobre la base de culpar de todos los males a la administración de Pemex y a su sindicato, eludiendo abordar las verdaderas responsabilidades en la gestación de los problemas. Son poderosos los intereses en juego, las presiones de los poderes fácticos y el arrinconamiento de Pemex. Ojalá haya tiempo de pensar y debatir con verdad dónde se encuentran los verdaderos intereses nacionales en vez de seguir esclavizados por ideologías irrealistas periclitadas. El director de Pemex tiene encomiendas múltiples: preparar los planteamientos estratégicos, impulsar la reconstrucción de la empresa, revertir, con verdades y acciones, la leyenda negra de la organización petrolera nacional y refrenar la cortedad de miras o el entreguismo de algunos partidos políticos.